



Asamblea General

Quincuagésimo séptimo período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general
27 de septiembre de 2006
Español
Original: inglés

Sexta Comisión

Acta resumida de la 27ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el miércoles 6 de noviembre de 2002, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Prandler (Hungría)

Sumario

Tema 156 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 54º período de sesiones (*continuación*)

Tema 157 del programa: Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada, y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, a la Jefa de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

02-67802 (S)



Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.

Tema 156 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 54° período de sesiones (continuación)
(A/57/10 y Corr.1)

1. **El Sr. Ortúzar** (Chile), en relación con el capítulo V del informe, dice que la nacionalidad continua es una expresión de la vinculación efectiva que debe poseer una persona con el Estado que ejerce la protección, que debe estar presente tanto en el momento en que aquélla sufrió el perjuicio como en el momento en que se efectúa la reclamación. A este respecto, el artículo 4 denota ambigüedad: aunque la palabra “continua” se consigna en el título del artículo, no figura en el texto, que tampoco establece que la nacionalidad deba estar presente durante el período intermedio. La idea de la continuidad es justamente que la persona mantenga la nacionalidad, para salvaguardar casos en que una persona asume la nacionalidad en un segundo momento únicamente para solicitar la protección diplomática.

2. La Comisión de Derecho Internacional ha solicitado comentarios de los Estados acerca de si la protección otorgada a los miembros de una tripulación que poseen la nacionalidad de un tercer Estado es una forma de protección ya cubierta adecuadamente por la Convención sobre el Derecho del Mar o si en tales casos se necesita un reconocimiento del derecho a ejercer protección diplomática por el Estado del pabellón del barco. Similares argumentos se aplican a la tripulación de una aeronave o de un vehículo espacial. El artículo 292 de la Convención sobre el Derecho del Mar dispone que la solicitud de pronta liberación de un buque o de su tripulación sólo podrá ser formulada por el Estado del pabellón o en su nombre. En la causa sobre el *Buque Saiga* (Guinea contra San Vicente y las Granadinas), Guinea alegó que los reclamos del maestro y los otros miembros de la tripulación eran claramente solicitudes de protección diplomática, que no podía ser invocada por San Vicente y las Granadinas por no ser aquéllos nacionales de ese país. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar no acogió la demanda por estimar que la Convención no abordaba aspectos de nacionalidad de la tripulación.

3. Si bien el caso descrito en el artículo 292 podría poseer algunas de las características propias de la protección diplomática, como es el ejercicio de una

acción determinada por el Estado del pabellón, no apunta específicamente a la protección diplomática. Para su invocación no se requiere que estén presentes otros aspectos de la protección, como por ejemplo, las normas relativas a la nacionalidad de la tripulación o el agotamiento de los recursos internos. Antes de determinar si esa situación debe ser objeto de tratamiento específico en el articulado sobre protección diplomática, sería conveniente que la Comisión precisara qué aspectos de la protección diplomática no están ya cubiertos por las reglas generales que se han insertado en los respectivos artículos, a qué fines apuntaría y en qué se diferenciaría de las regulaciones que se contienen en la Convención sobre el Derecho del Mar, para no interferir con las disposiciones de ésta.

4. En cuanto a las reservas a los tratados, la función del depositario debe limitarse a una revisión meramente formal de la reserva; si existen vicios de forma, el depositario podrá devolver la reserva al Estado formulante sin mayor cuestionamiento. En lo que se refiere a cuestiones de fondo, la ponderación de las reservas debería corresponder a los Estados de que se trate. No obstante, sí parece tener un cierto asidero la alternativa de que el depositario pueda señalar la inadmisibilidad de la reserva a la atención del Estado que la formula y, si éste insiste respecto de la misma, se informe a los demás Estados Partes de la existencia de esa reserva inadmisibile, los cuales adoptarán la decisión pertinente.

5. El proyecto de directriz 1.5.1, sobre “reservas” a tratados bilaterales, no resuelve la cuestión de una declaración formulada después de entrar en vigor el tratado bilateral. Incluso *contrario sensu*, podría interpretarse que tal declaración sí constituye una reserva.

6. En respuesta a las consultas específicas que el Relator Especial ha formulado a los Estados, el orador dice que su delegación concuerda con la utilización de los diversos medios de comunicación electrónicos a los efectos de la formulación de reservas, aunque esa reserva debe ser reiterada por escrito. Para ser coherentes con el espíritu de la norma, la fecha de la reserva debería ser aquella en que se remite por el medio electrónico elegido. También es importante conocer cuál será la posición que se adoptará en las presentes directrices en lo tocante a la transmisión de la objeción expresa de las reservas. Respecto de ellas se plantean cuestiones de plazos perentorios, como el que se refleja en el artículo 20 5) de la Convención de

Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. En estos casos, se justifica la utilización de métodos rápidos y expeditos de comunicación. La fecha de la formulación de la objeción debe ser la de envío por el medio electrónico utilizado. Asimismo, el uso de medios de comunicación electrónicos debería traer como consecuencia la aceptación de métodos similares en relación con los instrumentos de ratificación o adhesión en los que se contengan esas reservas. Ésta es una cuestión que puede incluso exceder el ámbito de los trabajos sobre las reservas encomendados a la Comisión.

7. En cuanto a la segunda consulta formulada por el Relator Especial, su delegación considera que la constatación de la inadmisibilidad de una reserva por un órgano de control de la aplicación de un tratado es perfectamente procedente, sin perjuicio de lo que en cada caso señalen los tratados respectivos. Su delegación entiende el proyecto de directriz en el sentido de que la calificación de inadmisibilidad debiera implicar que los demás Estados Partes del tratado respectivo no pudieran aceptar ni rechazar individualmente la reserva. Las dos fases normalmente a cargo de los Estados individualmente considerados estarían superadas por la calificación hecha por el órgano de control. El texto propuesto parece indicar que el Estado formulante estaría compelido a retirar dicha reserva calificada como inadmisibile. Entendiendo que la conducta que se exigiría al Estado formulante es meramente formal, su delegación no se opondría a la redacción propuesta.

8. Por lo que se refiere a los proyectos de directriz aprobados provisionalmente por la Comisión en su 54º período de sesiones, su delegación comparte el criterio de que la inobservancia de los procedimientos internos respecto a la formulación de reservas no debería acarrear efectos en la esfera internacional. Bastaría con que la reserva fuese formulada por quien representa al Estado o a la organización internacional. Cualquier irregularidad en el procedimiento interno establecido podría ser solucionada por el Estado retirando la reserva. En cuanto al procedimiento de comunicación de las reservas, su delegación comparte el criterio de que la reserva se entiende formulada en el momento en que haya sido recibida por el depositario, y que los plazos para formular objeciones se cuentan desde el momento en que el Estado o la organización internacional destinatarios de la reserva reciben la notificación respectiva. Sin embargo, no queda claro si

la posibilidad de utilizar los sistemas electrónicos de comunicación se refiere a todas las comunicaciones a que da origen una reserva. En tal caso, sería apropiado expresarlo inequívocamente.

9. En lo que atañe a las funciones del depositario, reguladas por el proyecto de directriz 2.1.7, su delegación aceptaría, sólo a efectos de mayor claridad, separar este extremo del procedimiento a que se refiere el proyecto de directriz 2.1.8. Ambas cuestiones están estrechamente ligadas entre sí y se refieren a las funciones del depositario. Deberían precisarse los aspectos formales en virtud de los cuales el depositario estaría facultado para llamar la atención del formulante en relación con una determinada reserva. Estos aspectos no necesariamente deberían incluirse en el texto de las directrices, aunque deberían quedar reflejados como elementos de la historia de la norma. La expresión “debida forma” carece de la necesaria precisión. Las facultades del depositario en cuanto a la inadmisibilidad de una reserva deberían ejercerse restrictivamente y limitarse a los casos en que la improcedencia resultare evidente. El depositario no debería estar facultado para pronunciarse sobre la procedencia de la reserva desde el punto de vista, por ejemplo, de si concuerda o no con el fin del tratado respectivo.

10. Su delegación considera que los actos unilaterales de los Estados son una de las fuentes generadoras de obligaciones internacionales y, por tanto, un elemento importante de las relaciones jurídicas entre los Estados. Algunas normas de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados podrían aplicarse mutatis mutandis a la formulación de los actos unilaterales, en particular aquellas relativas a la capacidad de los Estados, las personas que representan al Estado, la irretroactividad, la nulidad y, mucho más limitadamente, la terminación y la suspensión. Aunque la práctica de los Estados es un elemento indispensable en el examen de este tema, la escasa sistematización de dicha práctica ha imposibilitado en muchos casos dar respuesta a los cuestionarios remitidos por la Comisión. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, especialmente en los asuntos de los *Ensayos nucleares* y de la *Competencia en materia de pesquerías*, también puede ser útil.

11. Su delegación comparte la definición de acto unilateral propuesta por el Relator Especial, en la medida en que considera explícitamente entre sus elementos la “manifestación de voluntad inequívoca

del Estado” y la “intención” del actor de “producir efectos jurídicos”. Sin embargo, la inclusión de las “organizaciones internacionales” como uno de los posibles destinatarios del acto unilateral no parece adecuada, pues las relaciones entre un Estado y una organización internacional de la que aquél es miembro se regulan por un estatuto propio, completamente distinto del marco jurídico en el que se insertan las relaciones entre Estados. En cuanto a la determinación de las personas con capacidad para emitir actos unilaterales en nombre del Estado, el orador dice que si bien la Convención de Viena de 1969 constituye un punto de partida fundamental, su aplicación a tales actos debería ser restrictiva. Sin lugar a dudas, los jefes de Estado, los jefes de Gobierno y los ministros de relaciones exteriores deben considerarse facultados para formular actos unilaterales en nombre de su respectivo Estado; sin embargo, la posibilidad de extender esa capacidad a otras personas no podría examinarse sino con un criterio estricto.

12. Su delegación concuerda con la inclusión de las causales de nulidad que se mencionan en el proyecto de artículos propuesto por el Relator Especial. No obstante, en el caso de la nulidad relativa, el texto debería resaltar su carácter excepcional. Así, en los casos del error, el dolo, la corrupción del representante del Estado y la violación de una norma fundamental del derecho interno del Estado autor del acto, las respectivas reglas deberían iniciarse señalando que dicho Estado “no puede” o “no podrá” invocar la respectiva causal “salvo que” concurren los requisitos que para cada caso se prevén. Su Gobierno considera que las normas relativas a la interpretación de los actos unilaterales deben regirse por el principio de la buena fe y que la interpretación debe ser de carácter restrictivo, de manera que no pesen sobre el Estado sino aquellas obligaciones que inequívocamente ha asumido. Las reglas de interpretación contenidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados constituyen también un marco de referencia en la elaboración del proyecto de artículos, con las necesarias adaptaciones. Desde este punto de vista, los artículos propuestos por el Relator Especial resultan adecuados; sin embargo, parecería conveniente dar una redacción definitiva a tales disposiciones sólo una vez que se haya completado el proyecto de artículos sobre los actos unilaterales. La referencia a los “trabajos preparatorios” dentro de los medios de interpretación complementarios no parece adecuada debido a la especial naturaleza de los actos unilaterales, que los

distingue de los tratados. No sólo deberían tenerse en cuenta las dificultades prácticas en la obtención de tales “trabajos preparatorios”, sino también la posibilidad de que la entrega de los respectivos antecedentes quede librada al criterio del propio Estado autor del acto, interesado en una interpretación favorable a sus intereses.

13. Tras recordar que la Comisión ha formulado consultas en relación con la responsabilidad de las organizaciones internacionales, el orador dice que, en consideración a las argumentaciones expuestas por la Sexta Comisión, Chile apoyó la decisión de ésta de asignar el tema a la Comisión de Derecho Internacional. Ésta, por su parte, deberá tener en cuenta que la Sexta Comisión no ha concluido el debate sobre la forma definitiva que ha de adoptar el texto sobre responsabilidad de los Estados entregado por la Comisión de Derecho Internacional. Los artículos sobre responsabilidad de los Estados deben servir como guía para la Comisión de Derecho Internacional, con la prevención que acaba de mencionarse. El texto sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales que debe elaborarse ha de ser independiente del de la responsabilidad de los Estados. Incluso la remisión de un texto al otro debe ser objeto de estudio específico. Las normas que redacte la Comisión de Derecho Internacional deben limitarse a cuestiones de derecho internacional general y no referirse a las condiciones de existencia de los hechos ilícitos. Chile comparte con otras delegaciones el criterio de que el ámbito del estudio debe limitarse a las organizaciones intergubernamentales. La extensión a otras organizaciones dificultaría un pronto y adecuado término de los trabajos, dada la variedad de las organizaciones y los diferentes regímenes jurídicos que las soportan.

14. **La Sra. Bannon** (Observadora, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) destaca la contribución de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) a la resolución del problema de la fragmentación del derecho internacional en lo que atañe a la respuesta a los desastres internacionales, especialmente mediante la promoción del derecho relativo a la respuesta a los desastres internacionales. Tal como se indica en el Informe Mundial sobre las Catástrofes correspondiente a 2002, es evidente que existe una preocupante falta de claridad sobre cuál es el derecho existente y cómo debe

administrarse y aplicarse, lo que ha creado problemas de incertidumbre y de pérdida de tiempo en momentos críticos.

15. Para mejorar las respuestas operacionales, la planificación y los instrumentos de coordinación, en febrero de 2001 la FICR reunió a un grupo de expertos jurídicos y en actividades sobre el terreno de varias instituciones y organizaciones, entre ellas la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, para estudiar estas cuestiones. Posteriormente, emprendió un estudio de la legislación existente y de las prácticas sobre el terreno más significativas en materia de respuesta a los desastres internacionales, el denominado proyecto sobre el derecho relativo a la respuesta a los desastres internacionales. Es importante destacar que, en el marco del estudio de la Comisión sobre la fragmentación del derecho internacional, el citado proyecto no pretende crear nuevas normas jurídicas. Más bien, tiene por objeto recopilar y analizar exhaustivamente todo el derecho internacional existentes, tanto vinculante como no vinculante, sobre los desastres naturales para evaluar posteriormente su eficacia basándose en estudios de campo en varias regiones proclives a los desastres previamente seleccionadas. Los resultados del proyecto serán presentados a los gobiernos y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja cuando se reúnan en diciembre de 2003 en Ginebra, con motivo de la Conferencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

16. Con este proyecto, la FICR pretende mejorar la competencia de todos los que se ocupan de responder a las situaciones de emergencia, especialmente a los desastres naturales, con el fin de maximizar su capacidad de respuesta y minimizar los riesgos para las poblaciones amenazadas por los desastres. La recopilación y publicación de los instrumentos existentes en el contexto general del proyecto tendrá dos resultados positivos. Por una parte, facilitará un punto de referencia con el que podrán medirse las carencias y lagunas de las leyes actuales y podrá valorarse su eficacia en este ámbito. Asimismo, ofrecerá por primera vez un compendio del derecho existente, lo que permitiría elaborar posteriormente una publicación simplificada y comprensible que pueda ser utilizada por quienes trabajan sobre el terreno donde ocurren los desastres.

17. Según se desprende de las discusiones mantenidas en una primera etapa en reuniones oficiales y oficiosas celebradas en Ginebra, varios gobiernos valoran positivamente el análisis emprendido por la FICR. Asimismo, se considera que el debate sobre asistencia internacional a las operaciones de búsqueda y salvamento en zonas urbanas, celebrado durante el período de sesiones de julio del Consejo Económico y Social y moderado por la delegación de Turquía, fue de gran importancia para la FICR. El proyecto sobre el derecho relativo a la respuesta a los desastres internacionales se prolongará hasta diciembre de 2003 con una filosofía general e incluyente. Estados, organismos de las Naciones Unidas, sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizaciones no gubernamentales que operan sobre el terreno, miembros de la comunidad universitaria y otros expertos participará en la recogida del correspondiente material, la recopilación de experiencias sobre el terreno que puedan resultar útiles y la discusión de mecanismos que permitan un mejor reconocimiento y desarrollo de este importante sector del derecho. Las valiosas experiencias obtenidas gracias al proyecto permitirán que los responsables de tomar las decisiones sepan con claridad qué debe hacerse para que el mundo pueda disponer de un sistema normativo que beneficie directamente a las víctimas de los desastres, dentro de un verdadero espíritu de solidaridad humana. La FICR se compromete a mantener al sistema de las Naciones Unidas y a los Estados plenamente informados de su labor en ese importante sector del derecho internacional.

18. **El Sr. Rosenstock** (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional) dice que el debate sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional que todos los años se celebra en la Sexta Comisión es de suma importancia para aquella, ya que le permite recibir orientación normativa y constituye una oportunidad para intercambiar opiniones entre ambos órganos. La utilidad de este intercambio no podría ser mayor, pues es fundamental para que los proyectos de instrumentos de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional elaborados por la Comisión de Derecho Internacional estén perfectamente arraigados en la práctica de los Estados y tengan mayores posibilidades de ser aceptados.

19. En cuanto a la labor de la Comisión sobre el tema de la protección diplomática, el debate sobre la

continuidad de la nacionalidad puso de relieve la existencia de tres grupos principales de delegaciones: las que no creen que la residencia sea necesaria y, por lo tanto, entienden que, al considerarla como un requisito, la Comisión no ha ido suficientemente lejos; las que piensan que la Comisión ha actuado correctamente; y las que se muestran muy preocupadas por la ruptura de la doctrina de la continuidad de la nacionalidad y temen que ello desvíe la atención de los problemas de la protección diplomática propiamente dicha hacia el sector de los derechos humanos. La Comisión agradecería que los Estados se pronunciaran sobre estos extremos y no cree que las excepciones al principio de continuidad de la nacionalidad sean afirmaciones de *lege data*, sino más bien de *lege ferenda*.

20. En lo que respecta a la labor de la Comisión sobre las reservas a los tratados, muchas delegaciones han expresado su preocupación en relación con las declaraciones interpretativas condicionales, que, en su opinión, pueden ser percibidas como una forma de reserva. Otra cuestión que se ha planteado es la de las funciones del depositario: algunas delegaciones consideraron que la posibilidad de que el depositario desempeñara cualquier tipo de función en relación con las reservas manifiestamente inadmisibles era incompatible con lo que dispone en términos inequívocos el artículo 77 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Difícilmente puede discutirse esta conclusión si la referida función se interpreta como una obligación impuesta al depositario, aunque, por otra parte, ninguno de los comentarios realizados menciona la naturaleza no obligatoria del procedimiento propuesto. En algunos comentarios se indica que, aunque los trabajos sobre las reservas a los tratados son de gran utilidad, se están prolongando más de lo que en un principio se creyó necesario y están alcanzando un nivel excepcionalmente alto de exhaustividad.

21. En cuanto a la labor en materia de actos unilaterales de los Estados, la Sexta Comisión se ha hecho eco de la opinión de la Comisión de Derecho Internacional de que es preciso disponer de más información; de hecho, ésta considera imprescindible que los gobiernos le proporcionen información sobre sus prácticas en la materia. La impresión es que la Sexta Comisión considera que los trabajos sobre el tema han comenzado con buen pie, aunque debe actuarse con cautela antes de aceptar plenamente

referencias a formulaciones propias del derecho de los tratados, como la propuesta relativa a la norma *acta sunt servanda*.

22. Es alentador observar que la labor de la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad internacional, responsabilidad de las organizaciones internacionales, fragmentación del derecho internacional y recursos naturales compartidos ha sido acogida satisfactoriamente por la Sexta Comisión.

23. Aunque se ha tomado debida nota de las declaraciones formuladas ante la Sexta Comisión, a la Comisión de Derecho Internacional le resultaría especialmente útil disponer de los comentarios por escrito; el orador considera alentador el número de delegaciones que han indicado su intención de presentar tales comentarios, además de sus intervenciones orales sobre las cuestiones enumeradas por la Comisión de Derecho Internacional, en el capítulo III de su informe. Asimismo, desea reiterar la petición que su predecesor formuló en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de que las delegaciones consideren igualmente la posibilidad de responder al cuestionario sobre los actos unilaterales de los Estados.

24. La Comisión de Derecho Internacional emprende su nuevo quinquenio con energía y entusiasmo, con arreglo a un programa ambicioso que pretende culminar una o dos series de proyectos de artículos para finales del período, avanzando al mismo tiempo en todos sus temas, incluidos los nuevos. También seguirá examinando sus métodos de trabajo para aumentar su productividad sin menoscabo de la calidad del resultado.

Tema 157 del programa: Informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión (A/57/26)

25. **El Sr. Zackheos** (Chipre) (Presidente del Comité de Relaciones con el País Anfitrión) presenta el informe del Comité (A/57/26). Dice que una cuestión que suscitó gran interés en el año precedente fue la aprobación por la ciudad de Nueva York de un nuevo Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos, que entró en vigor el 1º de noviembre de 2002. El Comité dedicó dos reuniones a examinar el Programa de estacionamiento y la opinión del Asesor Jurídico al respecto, y decidió seguir ocupándose de este tema mientras el Programa siga en vigor.

26. **La Sra. Castro de Barish** (Costa Rica), que interviene en nombre del Grupo de Río, resalta la importancia de las relaciones con el país anfitrión y la necesidad de garantizar el pleno respeto de las inmunidades y los privilegios del personal diplomático de conformidad con el derecho internacional general, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas y el Acuerdo relativo a la Sede. El Grupo de Río ha expresado sus reservas sobre la legalidad de algunos aspectos del Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos (A/AC.154/355) y su impacto sobre la inmunidad del personal diplomático y la obligación del país anfitrión de facilitar sus funciones. Es lamentable que el país anfitrión no haya pospuesto la aplicación de este Programa, lo que habría permitido celebrar mayores consultas y que las misiones diplomáticas se adaptaran a sus demandas prácticas y exigencias financieras. Los Estados miembros del Grupo de Río observarán con detenimiento la aplicación del Programa para que no afecte a los derechos y las obligaciones que dimanarían de la Convención de Viena y el Acuerdo relativo a la Sede.

27. **El Sr. Nguyen Thanh Chau** (Viet Nam), que interviene en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), confía en que el país anfitrión siga cumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Acuerdo relativo a la Sede y dé a las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, velando por que se respeten todas las inmunidades y privilegios que el derecho internacional reconoce a la comunidad diplomática. Los Estados miembros de la ASEAN reconocen que el país anfitrión tiene derecho a que los miembros de la comunidad diplomática no abusen de los privilegios y las inmunidades que les corresponden hasta el punto de ignorar las leyes del país anfitrión.

28. En cuanto a las restricciones a los desplazamientos impuestas por el país anfitrión, algunas delegaciones siguen teniendo problemas que les impiden participar en las reuniones de las Naciones Unidas. En el párrafo 4 de su resolución 56/84, la Asamblea General pidió al país anfitrión que considerase la posibilidad de levantar las restricciones

impuestas a los desplazamientos del personal de ciertas misiones y de funcionarios de la Secretaría de ciertas nacionalidades. Aunque los Estados miembros de la ASEAN reconocen el derecho del país anfitrión a controlar la entrada en su territorio y a satisfacer sus necesidades en materia de seguridad nacional, creen que es preciso actuar con cautela y encontrar un equilibrio para que las restricciones a los desplazamientos no entorpezcan la participación de los delegados en las actividades de las Naciones Unidas o el funcionamiento de las misiones. También confían en que el país anfitrión sea flexible y reconsidere la necesidad de someter a los dignatarios y funcionarios que viajan para participar en las misiones ante las Naciones Unidas a controles de seguridad rigurosos y vergonzantes a la llegada a los aeropuertos y a la salida de éstos, y en que se tomen nuevas medidas para que la situación se resuelva de modo satisfactorio.

29. Los Estados miembros de la ASEAN acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el país anfitrión para resolver las cuestiones relacionadas con la tributación que afectan a algunas misiones permanentes y agradece sus denodados esfuerzos para solucionar de manera amistosa y satisfactoria un caso concreto de este tipo. Los Estados miembros de la ASEAN alientan a que se pongan en marcha iniciativas similares para resolver las cuestiones relacionadas con la tributación en un espíritu de cooperación basado en el diálogo entre las correspondientes misiones permanentes y las autoridades del país anfitrión.

30. Los Estados miembros de la ASEAN confían en que el país anfitrión vele por que el nuevo Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos de la ciudad de Nueva York se aplique de manera justa, no discriminatoria y eficiente, en consonancia con lo dispuesto en el derecho internacional. Asimismo, instan enérgicamente a que prevalezca un espíritu de diálogo permanente y constructivo para resolver los problemas de conformidad con las obligaciones que la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Acuerdo relativo a la Sede imponen al país anfitrión. Esos Estados confían en que a través del Comité se responda satisfactoriamente a las preocupaciones del país anfitrión y de la comunidad diplomática sobre la aplicación del Programa de estacionamiento. Los Estados miembros de la ASEAN expresan su total apoyo a las recomendaciones y conclusiones que figuran en el párrafo 35 del informe.

31. **El Sr. Elmessallati** (Jamahiriya Árabe Libia), refiriéndose al capítulo III A del informe, observa con preocupación que la normativa sobre desplazamientos del país anfitrión sigue creando impedimentos a los miembros de las misiones diplomáticas acreditados ante las Naciones Unidas. El país anfitrión no ha resuelto adecuadamente los problemas pese a los repetidos llamamientos y recomendaciones del Comité, incluidos en numerosas resoluciones de la Asamblea General. Muchas delegaciones han sido sometidas, sin justificación alguna, a procedimientos arbitrarios que contravienen lo dispuesto en la ley, el Acuerdo relativo a la Sede y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Diplomáticos de su país han sido sometidos a restricciones de desplazamiento y se han visto confinados a los cinco distritos de la ciudad de Nueva York e incluso el Representante Permanente de su país ha sido sometido a procedimientos poco razonables y sólo se le ha permitido desplazarse dos veces por mes a su vivienda, situada en una ciudad cercana de Nueva Jersey. En cuanto a la concesión de visados de entrada a miembros de la misión de su país y de las delegaciones que viajan para participar en las reuniones de la Asamblea General, la situación ha empeorado, pues el plazo para la obtención de los visados ya no es de tres semanas, como sucedía anteriormente, sino de dos meses, y en ocasiones aún más. Cabe preguntarse cuál es el motivo de semejante desmesura, que conculca todos los principios del derecho internacional. Su delegación reitera su llamamiento al país anfitrión para que cumpla las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo relativo a la Sede y el derecho internacional y elimine las restricciones injustificadas impuestas a su país.

32. En cuanto al capítulo III C del informe, su delegación fue una de las muchas que se opuso, en la 212ª sesión del Comité, al Programa de estacionamiento propuesto, por considerarlo incompatible con las obligaciones del país anfitrión y con el derecho internacional. Su delegación confiaba en que el país anfitrión suspendería voluntariamente el programa o al menos atendería los llamamientos realizados por numerosas delegaciones, incluida la suya, para suprimir el Programa. Por desgracia no ha sido así. No obstante, su delegación aún confía en que el país anfitrión responda a las numerosas peticiones de suspensión del Programa hasta que se encuentre una solución aceptable para todas las partes que facilite la labor de los miembros de las misiones diplomáticas en su principal lugar de trabajo.

33. Por lo que se refiere al capítulo III B, relativo a la exención fiscal, su delegación observa con satisfacción que el problema de los impuestos inmobiliarios del edificio de su delegación en Nueva York se ha resuelto equitativamente y de forma definitiva, después de que la Oficina del Comisionado de la Ciudad de Nueva York aceptara el criterio del Departamento de Estado de los Estados Unidos y admitiera la opinión de su propio país de que el impuesto era ilegal. Es particularmente gratificante que el problema, que se prolongó durante 16 años, haya sido resuelto con la participación del Comité de Relaciones con el País Anfitrión, y su delegación agradece sobremanera el espíritu constructivo con el que el representante del país anfitrión en el Comité ha abordado la cuestión. Este talante positivo sería útil para resolver otros problemas, como por ejemplo, los topes impuestos a las cuentas bancarias de su misión, que dificultan considerablemente su trabajo. Su delegación confía en que el país anfitrión habrá de considerar esas limitaciones, que carecen de justificación de hecho y de derecho.

34. Su delegación desea poner de manifiesto que los miembros de la misión y los miembros de las delegaciones de su país que viajan a Nueva York para asistir a las reuniones de las Naciones Unidas cumplen escrupulosamente las leyes y reglamentos del país anfitrión y las exigencias que impone en materia de paz y seguridad. Ello es consecuencia del absoluto respeto que su país profesa al derecho internacional, la soberanía de los Estados y las normas internas. Su delegación confía en que el país anfitrión actúe conforme a su calidad de anfitrión, prestando todas las facilidades necesarias para que las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas puedan cumplir sus funciones.

35. **El Sr. Tarasenko** (Federación de Rusia) dice que el tema más importante del programa del Comité de Relaciones con el País Anfitrión fue una vez más el estacionamiento de los vehículos diplomáticos. Ese complejo problema sólo puede resolverse mediante el diálogo entre todas las partes afectadas y en estricta conformidad con el derecho diplomático internacional y las obligaciones del país anfitrión. Los intentos de aplicar medidas unilaterales sin tener en cuenta de modo realista la opinión del cuerpo diplomático y las características específicas de su trabajo y su estatuto sólo pueden empeorar las condiciones de trabajo de las misiones y ocasionar problemas reales, como ha puesto

de relieve la reciente aplicación del nuevo Programa de estacionamiento de la ciudad de Nueva York. Su delegación hace un llamamiento al país anfitrión, y ante todo a la ciudad de Nueva York, para que demuestren su buena voluntad y reanuden un diálogo constructivo que permita alcanzar soluciones de compromiso realistas al problema del estacionamiento, mostrando el debido respeto a las necesidades legítimas de la comunidad diplomática.

36. Otro problema discutido en el Comité de Relaciones con el País Anfitrión el año precedente fue la práctica de los Estados Unidos en materia de expedición de visados de entrada para representantes oficiales. Con frecuencia se produjeron demoras considerables en su expedición, lo que retrasó la llegada de los funcionarios y el ejercicio de sus actividades oficiales relacionadas con las Naciones Unidas, hasta el punto de verse obligados en varias ocasiones a renunciar a participar en ellas. Su delegación constata la asistencia y el apoyo prestados por la Misión de los Estados Unidos con miras a resolver algunos casos específicos, aunque es preciso tomar medidas fundamentales para resolver el problema de los visados que afecta a los Estados Miembros y el país anfitrión.

37. Preocupa sobremanera a su delegación la falta de avances en relación con el levantamiento de las restricciones a los desplazamientos impuestas al personal de determinadas misiones y de la Secretaría. Esta práctica es discriminatoria y contraviene lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales básicos; el orador insta al país anfitrión a que levante rápidamente tales restricciones, que son totalmente incompatibles con las realidades contemporáneas.

38. Es de suma importancia evitar cualquier erosión del entendimiento mutuo y las buenas relaciones de trabajo entre el cuerpo diplomático y las autoridades de la ciudad, que son el fruto de muchos años de laborioso esfuerzo. La Federación de Rusia se muestra plenamente dispuesta a contribuir al desarrollo de un ambiente de cooperación y respeto mutuo y apoya las recomendaciones y conclusiones que figuran en el apartado 35 del informe del Comité.

39. **El Sr. Kofod** (Dinamarca), que interviene en nombre de la Unión Europea, los Estados asociados de Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y Rumania, y Noruega, agradece al país anfitrión y, en

particular, a la ciudad de Nueva York, las medidas adicionales adoptadas desde el 11 de septiembre de 2001 para garantizar la seguridad de las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas y su personal. La Unión Europea comprende y apoya las medidas extraordinarias adoptadas, en particular en relación con el acceso a las instalaciones de las Naciones Unidas, y sigue empeñada en cooperar plenamente con el país anfitrión en este ámbito. La Unión Europea desea reiterar que las cuestiones relativas a la expedición de visados a representantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y las relativas a sus desplazamientos en el territorio del país anfitrión deben resolverse según lo previsto en las correspondientes disposiciones del Acuerdo relativo a la Sede.

40. En cuanto al transporte y otras cuestiones conexas, la Unión Europea desea insistir una vez más en la importancia de garantizar espacio suficiente para el estacionamiento de los vehículos diplomáticos. Las misiones diplomáticas no podrán operar eficazmente si el acceso del personal diplomático se ve entorpecido por una insuficiente capacidad de estacionamiento. La Unión Europea estima que el asunto debe seguir siendo examinado, en particular en lo que respecta a la compatibilidad de la aplicación práctica del nuevo Programa de estacionamiento con el derecho internacional.

41. La Unión Europea apoya las recomendaciones y conclusiones que figuran en el párrafo 35 del informe y acoge con satisfacción el compromiso del país anfitrión de tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier interferencia en el funcionamiento de las misiones diplomáticas.

42. **El Sr. Kann** (Sierra Leona) expresa su preocupación por el trato que el país anfitrión y, en particular, los oficiales de seguridad de los aeropuertos, dispensan a los diplomáticos. Si bien es comprensible que se hayan adoptado medidas especiales a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la exigencia de que los diplomáticos y, en particular, los representantes permanentes se descalcen y se quiten la chaqueta, y la inspección de sus equipajes constituyen una infracción de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas; por lo demás, ningún titular de un pasaporte diplomático cometería un acto de terrorismo. Cuando los funcionarios del país anfitrión visitaron Sierra Leona fueron tratados respetuosamente con arreglo a las obligaciones contraídas por su Gobierno. Es descorazonador que un país civilizado no

instruya a sus empleados para que muestren el debido respeto por los representantes de otro Estado soberano; el orador pide al país anfitrión que instruya adecuadamente a sus funcionarios sobre estas realidades.

43. La opinión del Asesor Jurídico sobre el Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos no es más que una de las posturas posibles; pueden existir otras opiniones al respecto. El Programa es contrario al derecho internacional, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Acuerdo relativo a la Sede y es intención de su delegación consultar con otras del mismo parecer con el fin de recabar una opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre su legalidad.

44. **El Sr. Rosand** (Estados Unidos de América) dice que los Estados Unidos se enorgullecen de servir de país anfitrión de las Naciones Unidas y cumplen todas sus obligaciones y compromisos a este respecto. El orador agradece la cooperación y el espíritu constructivo de que han hecho gala los miembros del Comité de Relaciones con el País Anfitrión y la participación cada vez mayor de las delegaciones de los observadores; la composición limitada aunque representativa del Comité ha hecho que sea eficaz y más receptivo de lo habitual, sobre todo si se tiene en cuenta que es el único Comité de este tipo que existe en los países anfitriones de las Naciones Unidas que informa a la Asamblea General.

45. No debe sorprender que el Asesor Jurídico haya declarado que el Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos se adecua al derecho internacional y a las obligaciones del país anfitrión, ya que en su elaboración se tuvieron en cuenta las preocupaciones y preferencias legítimas de la comunidad diplomática de Nueva York. Su delegación está empeñada en que el Programa se aplique de manera transparente, justa y no discriminatoria y examinará periódicamente su eficacia y equidad. El orador hace hincapié en que el Programa mejorará la situación del tráfico y la seguridad y facilitará la labor de los diplomáticos.

46. Algunas delegaciones se han opuesto a las restricciones a los desplazamientos privados y no oficiales de los miembros de determinadas misiones permanentes. Tales restricciones no infringen el derecho internacional, que no exige que los Estados Unidos permitan a esas personas desplazarse a otras

partes del país, salvo por motivos oficiales relacionados con las Naciones Unidas.

47. **El Sr. Moushoutas** (Chipre) presenta el proyecto de resolución A/C.6/57/L.25 y anuncia que Bulgaria, el Canadá y Côte d'Ivoire se han sumado a los patrocinadores. El texto del presente año incluye dos nuevas disposiciones: el cuarto párrafo del preámbulo pone de relieve la necesidad de crear conciencia pública sobre el papel que desempeñan la Organización y las misiones permanentes en el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, mientras que el párrafo 3 toma nota de la opinión del Asesor Jurídico sobre el Programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos; las posiciones expuestas a este respecto, incluida la petición de la mayoría de los oradores de que se aplase la aplicación del Programa; y el compromiso contraído por el país anfitrión de mantener condiciones idóneas para el funcionamiento de las delegaciones y las misiones acreditadas ante las Naciones Unidas de un modo justo, no discriminatorio, eficiente y compatible con el derecho internacional. Por último, el orador observa que la alusión al párrafo 34 del informe del Comité de Relaciones con el País Anfitrión que figura en el párrafo 1 debería referirse al párrafo 35.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.